

Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

SE SUSCRIBE

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.

En la Imprenta de Acosta, Fortaleza-21.



PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1880.

SABADO 19 DE JUNIO.

Núm. 74.

PARTE OFICIAL.

GOBIERNO GENERAL

DE LA

ISLA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA.

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS.

Salinas marítimas.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 19 de Mayo próximo pasado y bajo el número 219, se ha servido comunicar á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Remitido al Consejo de Estado en pleno el expediente sobre mejor sistema de explotación de las salinas de Puerto Rico, ha consultado con fecha 5 del corriente lo que sigue:—“Excmo. Sr.:—Con Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 28 de Enero último, se remitió á informe de este Consejo en pleno el expediente instruido sobre el mejor sistema de explotación de las salinas marítimas de Puerto-Rico, acompañando además como antecedentes el relativo al arriendo de las salinas de Cabo-rojo y Guánica, el de rebaja de derechos que deben satisfacerse por las salinas que se conceden á particulares, y el de registro de la titulada *Consuelo*.—A fin de fomentar y alentar la riqueza de las salinas en la Isla, se dictaron el Real Decreto de 23 de Agosto y Real orden de 25 de igual mes de 1868, sujetando las salinas á la Ley de minería y declarando denunciadas aun las pertenecientes al Estado.—Como á pesar de las facilidades que tales disposiciones daban para la explotación de las salinas, no se hubiera obtenido resultado alguno apreciable, se pidieron al Gobernador General por Real orden de 23 de Junio de 1877, algunos datos sobre esta clase de riquezas, para adoptar en su vista la resolución que se estimase mas acertada, orden que se confirmó por otra de 30 de Julio de 1878.—Entre tanto en 1877 se incoó expediente á instancia de Don Narciso Llauri solicitando la propiedad de la salina *Consuelo*, en término de Cabo-rojo, y apesar de haberse mandado por Real orden de 23 de Setiembre de 1878 que el indicado expediente se continuara, y se extendiera á favor del Registrador el correspondiente título de propiedad, ántes de recibirse en la Isla esta Real orden, el Gobernador General había acordado entre otras cosas suspender la adjudicación en propiedad de la citada salina, hasta que el Gobierno decidiera el expediente general sobre explotación de esta clase de riqueza, acuerdo de que se alzó el interesado y la Sección de Ultramar de este Consejo, á la que se oyó sobre el particular, opinó en dictámen de 8 de Abril de 1879 que procedía se confirmara, debiendo además activarse el expediente que por separado se instruya acerca del mejor sistema de explotación de las salinas en la Isla.—En cumplimiento de la citada Real orden de 30 de Julio de 1878 y del Decreto del Gobernador General, de que también se ha hecho mérito, de 13 de Octubre, la misma Autoridad Superior remitió con carta oficial de 21 de Enero de 1879 una Memoria formada por la Inspección de Minas, del deslinde, medición y avalúo de las salinas que el Estado posee en Puerto-Rico, y encarece además la conveniencia de que estas se arrienden, para que una vez conocidos por este medio los productos de que son susceptibles, se vendan en debida forma.—La expresada Memoria se resume diciendo que el procedimiento mas beneficioso es el de explotación directa por la Administración, pero no es medio realizable; que el arrendamiento es práctico y bastante pro-

vechoso para el Tesoro; que la enagenación sin previo arriendo es el ménos conveniente y aun peor que este el sistema que actualmente se sigue; y que la cesión á la industria particular con arreglo á la legislación de 1868 es también muy conveniente y el medio mas legal de todos.—Pasado el asunto por Reales órdenes de 31 de Marzo y 7 de Julio último á informe de la Junta superior facultativa de minería, lo emitió con fecha 20 de Octubre en el sentido de que, el mejor y mas conveniente sistema de aprovechamiento, es el de la venta adoptado en la Península por la Ley de 16 de Junio de 1869; pero teniendo en cuenta que en Puerto-Rico solo hay dos salinas del Estado, la de Cabo-rojo y la de Guánica, que tengan importancia, cree únicamente deben sacarse á la venta en pública subasta las dos salinas citadas y declarar francas y registrables todas las demás, con sujeción al Real Decreto de 23 de Agosto de 1868.—En vista de todo el Negociado correspondiente de este Ministerio estima que la legislación de 1868 debe circunscribirse solo á las salinas que el Estado no explote ni haya explotado hasta aquí, excluyéndose por tanto las de Cabo-rojo y Guánica, respecto de las cuales debe resolverse la forma de su aprovechamiento; y esta á su juicio puede ser la venta como propone la Junta superior facultativa de minería, con sujeción á las disposiciones que regulan en la Isla la venta de los bienes del Estado en general.—Habiendo de limitarse el Consejo á informar únicamente sobre el punto que se le consulta, esto es, acerca del mejor sistema de explotación de las salinas marítimas de la Isla de Puerto-Rico, pocas consideraciones ha de exponer para fundar su opinion en el particular, porque los antecedentes que obran en este asunto revelan todos con claridad, cuál deba ser la solución que conviene darle; y además la cuestión ha sido ya suficientemente ilustrada por Corporaciones de especial competencia facultativa, como lo es la Junta superior de minería.—Antes de 1868 las salinas todas de la Isla eran consideradas como propiedad del Estado y su aprovechamiento en general era comun, gravándose la extracción de sales con un módico impuesto; alguna vez llegaron á arrendarse, medio que no produjo resultados favorables por diversas razones; y como por las averiguaciones que se venían practicando acerca de la materia, se adquirió el convencimiento de que las salinas podían llegar á ser una gran riqueza en la Isla, se pensó desde luego en la mejor manera de fomentar y desarrollar esa riqueza, y al efecto se publicó en 23 de Agosto de 1868 un Real Decreto por el cual se sometieron las sustancias salinas al régimen de la Ley de minería, declarando por tanto francas y denunciadas todas las de la Isla.—Se creyó que entregada así esta riqueza á la iniciativa y al cuidado de los particulares, en muy poco tiempo, tantas y de tal entidad serian las concesiones otorgadas que el pago del impuesto correspondiente importaría mucho más que lo que hasta entonces habían venido produciendo al Estado las salinas; con lo cual no solo se conseguiría acrecentar los recursos del Tesoro, sino aumentar y desarrollar este ramo de la riqueza que tan importante se suponía en Puerto-Rico.—Pero el tiempo defraudó tales esperanzas y desvaneció los cálculos que se habían hecho en 1868.—Después de los doce años que van transcurridos, solo parece que se haya presentado en 1877 una solicitud de registro y esta limitada á una de las mejores salinas de la Isla, ya perfectamente conocida y que es la que mayores rendimientos ha producido al Estado. De manera que, á pesar de las facilidades que se dieron en la legislación, la riqueza de las salinas permanece en el mismo estado de postración en que ántes se hallaba, y el Real Decreto de 1868, si hubiera de cumplirse, solo daría por resultado ceder el Estado á los particulares la mejor salina de Puerto-Rico, cuando si se tratara de enagenar-

la le valdría una cantidad muy superior á lo que toda clase de impuestos ó contribuciones pudieran importar.—Así lo han comprendido los diversos Centros de la Isla, hasta el punto de que el Gobernador General, como queda indicado, suspendió que se extendiera el título de propiedad á uno de los registradores de una mina sita en término de Cabo-rojo, suspensión acerca de la cual informó favorablemente la Sección de Ultramar de este Consejo.—Ante semejante estado de cosas lo natural era revisar la legislación de 1868, para determinar si debía dejarse subsistente á pesar de su ineficacia y de no haber producido los efectos que se esperaban; y esta cuestión está íntimamente ligada con lo que se consulta, ó por mejor decir, es una verdadera cuestión previa de la misma, pues se admite que rija en su integridad la expresada legislación de 1868, y por tanto que el Estado no debe explotar por sí salina alguna, porque todas han de entregarse á los particulares, previas las oportunas concesiones; y después de llenados y cumplidos los trámites que las disposiciones vigentes previenen, es ocioso estudiar el sistema que el Estado ha de emplear en la explotación de las salinas, puesto que ninguna ha de explotar por sí.—El Consejo cree de conformidad con los Centros diversos que han informado en el asunto y principalmente de acuerdo con el parecer de la Junta superior facultativa de minería, que debe mantenerse la referida legislación de 1868, pues la explotación por el Estado, ya adopte la forma de arrendamiento, ya la directa, ya cualquiera otra combinación por sencilla que parezca, es siempre poco beneficiosa y no ha de compensar los gastos que necesita emplear al efecto, esto prescindiendo de las doctrinas económicas y principios administrativos que en materias de igual índole han prevalecido y que impiden sostener que el Estado limite de cierto modo la iniciativa particular, reservándose exclusivamente la propiedad de las salinas.—Pero al mantener esa legislación, es preciso evitar que el Estado se perjudique cediendo á los particulares salinas ya conocidas y explotadas por el mismo, cuya importancia es notoria, como por ejemplo, las salinas de Cabo-rojo y Guánica, pues el pago del impuesto no compensa la pérdida de la propiedad de las salinas indicadas ó los rendimientos que puede obtener explotándolas por sí.—En el supuesto de que el Estado se reserve determinadas salinas, hay que resolver qué sistema debe adoptarse para su aprovechamiento y explotación; y acerca de este punto los pareceres ó opiniones que se han omitido son también unánimes; todos creen que debe preferirse la venta, si bien la Inspección de Minas y el Gobernador General de la Isla estiman que ántes de procederse á la enagenación deberían arrendarse por espacio de algunos años, con el fin de conocer con exactitud sus productos.—El Consejo cree también que el medio preferible de aprovechar las salinas explotadas ó que lo hayan sido por el Estado, es la venta en pública subasta con arreglo á las disposiciones vigentes para los demás bienes del Estado, sin que haya necesidad ni sea de notoria conveniencia tampoco que á la venta preceda el arrendamiento. Quizá durante el tiempo por que este se estipulase, aún cuando se cuidase con esmero de arreglar ciertas condiciones preventivas de daños y perjuicios, desmereciera el valor de la salina ó en su explotación se cometiesen tales abusos que la hicieran perder en su estimación; pudiendo además temerse que (como ya ha sucedido) hubiera necesidad de rescindir el contrato, dándose lugar á todas las cuestiones que son consiguientes á este género de resoluciones y que perjudican siempre los intereses del Tesoro.—La venta inmediata evita todas esas complicaciones, y el Consejo cree que cualquiera inconveniente que pudiera producirse en el sentido que temen la Inspección

de Minas y el Gobernador General de la Isla es fácil prevenirlo y evitarlo en la redacción del oportuno pliego de condiciones, pactando al efecto las que se consideren mas beneficiosas, aún cuando pudiera con ellas dificultarse en algo la enagenación.—En resumen, limitándose el Consejo al único punto que se le consulta, es de dictámen:—Primero. Que conviene mantener el Real Decreto de 23 de Agosto de 1868 sobre régimen de las salinas, pero limitado solo á las que el Estado no explote ó haya explotado hasta ahora.—Y segundo. Que las salinas que el mismo Estado se reserve pueden venderse en pública subasta en la forma y mediante los trámites que se hallan prevenidos para la venta de los demás bienes del Estado.”—Y conformándose S. M. el Rey (q. D. G.) con la preinserta consulta, se ha servido resolver como en la misma se propone.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á fin de que el Ingeniero Inspector de Minas de esa Isla proceda á la tasación de las salinas de Cabo-rojo y Guánica, que ha de servir de tipo para la adjudicación de las mismas en pública subasta; recomendando á V. E. la mayor actividad posible para la resolución del expresado asunto.”

Y acordado su cumplimiento con fecha 14 del actual por el Excmo. Sr. Gobernador General, de su orden Superior se publica en este PERIÓDICO OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Junio 18 de 1880.—El Secretario del Gobierno General, Francisco Fontanals y Martínez. [2028]

Minas.—Memoria.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 19 de Mayo próximo pasado y bajo el número 224, se ha servido comunicar á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—El Rey (q. D. G.) ha visto con agrado la Memoria minera de esa Isla que presentó á V. E. el Ingeniero Don Angel Vasconi y acerca de la cual ha emitido dictámen favorable la Junta superior facultativa de minería, siendo de esperar que dicho Ingeniero continúe con la actividad posible el estudio geológico-minero que ha emprendido y que servirá para el conocimiento científico de esa provincia y para el fomento de su industria minera. Es así mismo la voluntad de S. M. se manifieste á V. E. que, según previene el Reglamento de minería de 15 de Enero de 1867, deben declararse caducadas todas las concesiones de minas en que no se hayan cumplido las condiciones que marca la Ley, y á este efecto procede que por ese Gobierno General de su digno mando se adopten las disposiciones oportunas, así como para que á la mayor brevedad se hagan efectivos los ingresos de las cantidades que adeudan al Tesoro todas las concesiones que se hallan en aquel caso, dando cuenta á este Ministerio de los resultados que con ella se obtengan.—De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento.”

Y acordado por el Excmo. Sr. Gobernador General su cumplimiento con fecha 14 del corriente, de su Superior orden se publica en este PERIÓDICO OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Junio 18 de 1880.—El Secretario del Gobierno General, Francisco Fontanals y Martínez. [2027]

NEGOCIADO 6°

Por el Ministerio de Ultramar, con fecha 24 del pasado y bajo el número 223, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Para la plaza de Oficial 4° de la Administración general de Correos de esa Isla, vacante por salida á otro destino de Don Casiano Clemente Ramos,